

# BOLETÍN JURISPRUDENCIAL No. 05 SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



---

## Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

## Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

---

# TABLA DE CONTENIDO

## ACCIÓN DE TUTELA

Rad. 41 001 23 33 000 2024 00294 00  
Violación del derecho al goce de las vacaciones / violación del derecho a la dignidad humana / vacaciones para acompañamiento a paciente con cáncer [pág. 4](#)

Rad. 41 001 23 33 000 2024 00197 00  
Negación del amparo solicitado por retiro forzoso / retiro forzoso del servidor público / retiro forzoso no sujeto a decisión judicial sobre reconocimiento pensional [pág. 6](#)

Rad. 41 001 33 33 007 2024 00259 01  
Violación del derecho a la salud y a la unidad familiar / traslado del servidor público por motivos de salud [pág. 8](#)

Rad. 41 001 33 33 005 2024 00266 01  
Calificación de la pérdida de la capacidad laboral / sujeto de especial protección constitucional / adulto mayor con discapacidad [pág. 10](#)

## ACCIÓN POPULAR

Rad. 41 001 23 33 000 2021 00228 00  
Vulneración de los derechos colectivos / remodelación de estadio de futbol Guillermo Plazas Alcid o construcción de uno nuevo [pág. 12](#)

## OBSERVACIÓN

Rad. 41001-23-33-000-2024-00214-00  
Inconstitucionalidad de la amnistía tributaria / amnistía tributaria / improcedencia de la condonación de deudas a cargo del contribuyente [pág. 14](#)

## NULIDAD

Rad. 41 001 33 33 004-2018-00256-01  
Las entidades territoriales no pueden vetar la exploración y explotación del subsuelo / nulidad del acuerdo del concejo municipal [pág. 16](#)

## NULIDAD ELECTORAL

Rad. 41 001 23 33 000 2023 00417 00  
Improcedencia de la nulidad del acto de elección del alcalde municipal de Yaguará / residencia electoral / prueba de residencia electoral [pág. 18](#)

## NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Rad. 41 001 33 33 006 2018 00003 01  
Control jurisdiccional del fallo de la acción de responsabilidad fiscal / imposición de multa a empresa de servicios públicos [pág. 20](#)

Rad. 41 001 23 33 000 2019-00454-00

Acción de lesividad / improcedencia de reconocimiento de la pensión de vejez / suspensión del pago de la mesada pensional [pág. 22](#)

## REPARACIÓN DIRECTA

Rad. 41001-33-33-004-2015-00161-01

Falla del servicio médico / responsabilidad patrimonial del estado por pérdida de oportunidad / muerte por shock anafiláctico y paro cardiorespiratorio por picadura de avispa [pág. 24](#)

Rad. 410013333-004-2015-00127-02

Muerte por electrocutamiento / inexistencia de nexo de causalidad - no se demostró que se trate de un riesgo que excede al común de habitantes [pág. 26](#)

Rad. 41 001 33 40 007 2016 00079 01

Uso excesivo de la fuerza pública / responsabilidad patrimonial del estado por falla del servicio / disparo de armas de fuego / evasión del retén policial [pág. 28](#)

Rad. 41001 33 33 702 2015 00206 01

Falla del servicio médico de urgencias / indebida atención al paciente / omisión por falta de remisión oportuna a ips demayor nivel de complejidad / torción testicular [pág. 30](#)

Rad. 41 001 33 33 004 2015 00108 01

Falla del servicio del sistema nacional penitenciario y carcelario / atención médica del recluso / enfermedad grave / muerte del recluso [pág. 32](#)

Rad. 41 001 33 33 003 2016 00368 02

Falta de configuración de la responsabilidad patrimonial del estado por privación injusta de la libertad / el procesado debió probar el pago de las obligaciones tributarias para la cesación de la acción penal [pág. 34](#)



<b>Magistrada Ponente:</b>	Nelcy Vargas Tovar
<b>Instancia:</b>	Primera
<b>Radicación:</b>	41 001 23 33 000 2024 00294 00
<b>Accionante:</b>	Lida María Ortega Calvache
<b>Accionado:</b>	Registraduría Nacional del Estado Civil - Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento del Huila
<b>Fecha:</b>	12 de septiembre de 2024

## VIOLACIÓN DEL DERECHO AL GOCE DE LAS VACACIONES / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA / VACACIONES PARA ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE CON CÁNCER

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala establecer si en el presente caso, la Registraduría Nacional del Estado Civil - Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento del Huila, ha vulnerado los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud, trabajo y al descanso de la señora Lida María Ortega Calvache, al no concederle el disfrute de sus vacaciones, correspondientes al periodo comprendido entre el 8/07/2022 al 07/07/2023, previamente autorizadas a través de Resolución No. 037 de fecha 15 de febrero de 2024.”

### Extracto

“...la negativa del disfrute de vacaciones no puede ser arbitraria, máxime teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha referido que el derecho a disfrutar de las vacaciones es irrenunciable y su compensación en dinero es una medida restringida y excepcional...”

“...la señora Lida María Ortega Calvache actualmente se encuentra atravesando una calamidad doméstica, derivada de la enfermedad catastrófica (cáncer), que padece su esposo, quien requiere de acompañamiento para llevar a cabo su tratamiento oncológico...”

“...la acción de tutela es procedente cuando existiendo otros mecanismos judiciales ordinarios de defensa: 1. Se promueva como mecanismo transitorio y el demandante demuestre la existencia de un perjuicio irremediable y 2. Cuando el mecanismo judicial ordinario no resulte idóneo para la protección de los derechos del demandante...”

Conforme a lo expuesto, la Sala no puede soslayar, que en efecto, la accionante presenta una situación particular, que requiere de priorización frente al uso y disfrute de sus vacaciones, pues el gozar de las mismas, mitigará en parte su situación familiar (brindar acompañamiento a su esposo) y psicológica al encontrarse atravesando una situación de dolor, pues se itera, el disfrute de las vacaciones no solo contribuye a la reposición de la fuerza de trabajo, sino que además implica la materialización de la dignidad humana, es decir, la propia realización de la actora junto a su familia.

Lo anterior, permite concluir a la Sala que, dadas las particularidades del caso bajo estudio, existe vulneración a los derechos fundamentales al trabajo, al descanso y dignidad humana de la señora Lida María Ortega Calvache, por lo que se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil- Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en el Departamento del Huila que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, realice los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio en la Registraduría Municipal de Altamira-Huila, y, proceda a conceder el disfrute de las vacaciones a la accionante, bajo los argumentos anteriormente expuestos.”

[Sentencia del 12 de septiembre de 2024, M.P: NELCY VARGAS TOVAR, radicación: 41001-23-33-000-2024-00294-00](#)



Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Primera
Radicación:	41 001 23 33 000 2024 00197 00
Accionante:	Gilberto Quiroga Álvarez
Accionados:	DESAJ Neiva y Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito
Fecha:	12 de septiembre de 2024

## NEGACIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR RETIRO FORZOSO / RETIRO FORZOSO DEL SERVIDOR PÚBLICO / RETIRO FORZOSO NO SUJETO A DECISIÓN JUDICIAL SOBRE RECONOCIMIENTO PENSIONAL

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala decidir: i) ¿El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor, al desvincularlo del cargo de escribiente por haber cumplido la edad de retiro forzoso y tener derecho a la pensión de jubilación? ii) ¿Puede el juez de tutela ordenar el reintegro de una persona que ha sido retirada del servicio por retiro forzoso por edad, cuando el cargo que desempeñaba ya está ocupado en propiedad por una persona con derechos de carrera?”

### Extracto

“El retiro así realizado, no vulnera los derechos al debido proceso y trabajo del actor, pues había superado la edad de retiro forzoso (72 años) y había efectuado aportes a pensiones por 1.685 semanas que le dan derecho a la pensión de jubilación de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993...”

“...la falta de precaución del demandante en reclamar con suficiente antelación el cambio de régimen pensional y, por ende, de reclamar la pensión, son las que le impiden contar con el ingreso que echa de menos, pero ello no permite atribuir a las demandadas la vulneración de sus derechos...”

“...el nombramiento de la señora Ortega Pérez como escribiente del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito en virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado citada en precedencia, obedece justamente al relevo generacional producto del retiro forzoso del servicio en razón a la edad, promoviendo más oportunidades de empleo...”

Bajo tales circunstancias, es claro que el reconocimiento de la prestación económica de pensión por vejez es un trámite de gestión propia del afiliado y en el caso sub examine, no se ha adelantado por decisión propia del accionante y no por mora o negligencia del empleador o la AFP, por tanto, no puede atribuirles su propia inacción a las demandadas ni condicionar su retiro a su voluntad o las contingencias de los procesos que adelanta o pretende adelantar, pasando por encima de la legislación vigente que establece como edad de retiro forzoso los 70 años y que inclusive, a la fecha el actor ya cuenta con 73, como tampoco es aceptable que alegue vulneración del debido proceso, pues no indicó de manera específica cual fue.

En conclusión, el Tribunal estima que las accionadas no han vulnerado los derechos del actor y por eso se negará el amparo deprecado.”

[Sentencia del 12 de septiembre de 2024, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41 001 23 33 000 2024 00197 00](#)



Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 007 2024 00259 01
Accionante:	Diego Armando Mazabel Cuellar
Accionadas:	Ministerio de Defensa - Policía Nacional
Fecha:	17 de octubre de 2024

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD Y A LA UNIDAD FAMILIAR /  
TRASLADO DEL SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVOS DE SALUD

Problema Jurídico

¿Debe revocarse la sentencia impugnada, porque la Policía Nacional no ha vulnerado los derechos fundamentales al demandante al negarle su solicitud de traslado especial, porque la entidad tiene poder discrecional para ubicar a sus servidores según lo requiera su misión institucional - necesidades del servicio y con la decisión se frena el desenvolvimiento administrativo y discrecional?

La tesis del Tribunal es que debe confirmarse la sentencia de primer grado por cuanto la orden de traslado especial de unidad del patrullero actor no desconoce los poderes y misión institucional de la demandada y se adoptó por haber desconocido la situación particular del demandante a lo que se adiciona que no se surtió la notificación de la decisión.”

Extracto

“...la decisión adoptada por la Dirección de Inteligencia Policial resulta arbitraria y vulneradora de los derechos fundamentales del actor, pues no respondió de forma adecuada y sustentada a la solicitud de traslado presentada por él, pues no tuvo en cuenta las condiciones de salud acreditadas y no le fue debidamente notificado el acto administrativo contentivo de la decisión...”

“...el derecho de petición del actor no fue garantizado, de una parte, porque no hay ningún razonamiento que analice las condiciones específicas del actor por la cual solicita el traslado, se omiten las conclusiones del comité de gestión humana y se omite el resultado de la visita socio-familiar requeridas para tomar la decisión, sin dejar de mencionar que brilla por su ausencia la indicación específica de las necesidades del servicio que impiden el traslado...”



“El Tribunal estima que el demandante es un sujeto de especial protección constitucional, dado que las enfermedades que lo aquejan lo tienen en condiciones que ameritan un trato diferencial, por ello, el no acceder a su solicitud de traslado vulnera sus derechos fundamentales y excede la discrecionalidad que le asiste a la Policía Nacional a través de las dependencias involucradas, dado que tal decisión carece de sustento como ya se advirtió e ignora las recomendaciones médicas otorgadas al paciente, debido a las patologías que presenta.”

[Sentencia del 17 de octubre de 2024, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 41 001 33 33 007 2024 00259 01](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	José Miller Lugo Barrero
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 005 2024 00266 01
<b>Accionante:</b>	Rubiela Celmira Cuchimba
<b>Accionado:</b>	Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
<b>Fecha:</b>	29 de octubre de 2024

## CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL / SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL / ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala resolver si ¿procede revocar o confirmar la sentencia de primera instancia y definir si procede amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida digna de la señora Rubiela Celmira Cuchimba, ante la negativa de la AFP- Colpensiones de tramitar la calificación de la pérdida de su capacidad laboral?”

### Tesis de la Sala

“La Sala revocará la sentencia de primera instancia, al encontrar, que al tratarse la señora Rubiela Celmira Cuchimba de un sujeto de especial protección constitucional, por su edad y condición de discapacidad, lo procedente es que tanto la administración de justicia como las entidades estatales propenden acciones afirmativas en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales; y, por tanto, en este caso, al no tenerse evidencia de que la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, hubiera atendido la solicitud del 23 de septiembre de 2024, dentro de los 15 días siguientes a su presentación, se configura una clara violación a los derechos fundamentales de petición y al debido proceso administrativo.”

### Extracto

“Rubiela Celmira Cuchimba solicitó la protección de sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, presuntamente vulnerados por la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, al no haberle efectuado la calificación de su pérdida de capacidad laboral por invalidez.

El a quo negó el amparo solicitado, argumentando que no existe prueba alguna que le permita inferir la afectación de los derechos invocados como vulnerados, al no haber aportado, a pesar de requerírsele, que la accionante hubiese subsanado o abierto nuevamente el trámite, por no adjuntarse las peticiones que aduce haber radicado.

“...no es posible dar por cierto que la accionante aportó toda la documentación el día 8 de septiembre de 2023 (No. 2023\_14970512) y el 24 de abril de 2024 (No. 2024\_7818092), pues, a pesar de así requerírsele el juzgado de origen en el auto admisorio, no fueron aportados por la parte actora...”

“...la accionante es una persona en condiciones de discapacidad, con un concepto de rehabilitación desfavorable y que requiere un dictamen actual de su PCL, a fin de establecer si tiene derecho o no a una pensión de invalidez, lo que implica, en consecuencia, que se encuentra dentro de un grupo poblacional que la jurisprudencia constitucional ha catalogado como de especial protección constitucional...”

“...la Sala revocará la sentencia de primera instancia, al encontrar que la señora Rubiela Celmira Cuchimba es un sujeto de especial protección constitucional, por su edad y condición de discapacidad y lo procedente es salvaguardar al máximo sus derechos fundamentales, como lo es el debido proceso administrativo y la seguridad social y, por tanto, al no tenerse evidencia que la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones hubiera atendido la solicitud del 23 de septiembre de 2024, dentro de los 15 días siguientes a su presentación, se considera necesario la protección de tales derechos...”

[Sentencia del 29 de octubre de 2024, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41 001 33 33 005 2024 00266 01](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Ramiro Aponte Pino
<b>Instancia:</b>	Primera
<b>Radicación:</b>	41 001 23 33 000 2021 00228 00
<b>Accionante:</b>	Personería Municipal de Neiva y otra
<b>Accionado:</b>	Ministerio del Deporte y otros
<b>Fecha:</b>	8 de octubre de 2024

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS / REMODELACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL GUILLERMO PLAZAS ALCID O CONSTRUCCIÓN DE UNO NUEVO

Problema Jurídico

“El sub lite se contrae a establecer si las condiciones en las que actualmente se encuentra el estadio de fútbol “Guillermo Plazas Alcid” amenaza o vulnera los derechos colectivos cuyo amparo solicitan los actores populares. En caso positivo, determinar si técnicamente procede su restauración, remodelación, recuperación, reforzamiento, reconstrucción, y si no lo fuere, disponer que no se inviertan más recursos públicos en el mismo.”

Extracto

“De acuerdo con el peritazgo rendido por la sociedad Ingeniería Sísmica y Estructural Sas, el colapso de la gradería en construcción se generó por las siguientes causas: `1) Fallas o deficiencias en el diseño de la cimbra o formaleta de construcción, que no guardaba el rigor necesario exigido por la NSR-10, en especial el diseño no cumplió con el literal C.6.1.4 de la NSR-10, ya que permitió el daño de la losa existente de las cabinas del nivel 467.15, lo cual desestabilizó la cimbra y lanzó al vacío concreto fresco que al caer desde 7.8 m impactó las gradas existentes y les generó su colapso. 2) El armado y configuración de las cimbras en la obra son deficientes y esta no era una situación fortuita o casual, sino que era una práctica constructiva común y recurrente del contratista, como también hay descuido y no se verificaba adecuadamente los lugares o puntos donde se apoyaran las cimbras, lo cual permitió la construcción de una cimbra inestable y mal arriostrada, que al fallar uno de sus puntos de apoyo fue incapaz de redistribuir la carga y permitió la caída de concreto fresco a las gradas inferiores, el impacto del concreto sobre las gradas inferiores generó el colapso de estas.”

“Tomando como marco de reflexión los hechos narrados y la mencionada normatividad, inequívocamente se puede colegir que las condiciones en que se encuentra el estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid vulneran los derechos colectivos al goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público<sup>5</sup> y la defensa del patrimonio público; porque gran parte del escenario deportivo se encuentra clausurado, y las autoridades que hacen parte del sistema nacional del deporte (Ministerio del Deporte, departamento del Huila y municipio de Neiva) no han adoptado medidas concretas para lograr su restauración y rehabilitación.”

“También se ha soslayado el derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; como quiera que la obra de remodelación se siniestró por deficiencias de planificación, dado que en el momento de diseñar y construir la “cimbra o formaleta de construcción” no se tuvieron en cuenta las normas de sismo resistencia (Nsr-10), generando el desplome de un área de la tribuna occidental y el consecuente debilitamiento de la estructura.”

“Con el fin de amparar los derechos colectivos al goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público y a la defensa del patrimonio público, moralidad administrativa y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, se ordenará al Ministerio del Deporte, al departamento del Huila y al municipio de Neiva, que dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, que dentro del marco de sus competencias legales, de manera mancomunada y solidaria, realicen un estudio, que permita definir, si urbanística y técnicamente es conveniente refaccionar y/o readecuar el estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid, o construir uno nuevo. Incluso, en otro sector, si fuera más conveniente.”

“Las obras que garanticen la restauración o construcción del escenario deportivo se deben ejecutar dentro de los cinco años siguientes, y a ella concurrirán dichas entidades con recursos técnicos, institucionales y financieros.”

[Sentencia del 8 de octubre de 2024, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41 001 23 33 000 2021 00228 00](#)



Magistrada Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Única
Radicación:	41001-23-33-000-2024-00214-00
Demandante:	Departamento del Huila
Demandado:	Acuerdo 016 de 2024 del Concejo de Garzón
Fecha:	10 de septiembre de 2024

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / INCONSTITUCIONALIDAD DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA / AMNISTÍA TRIBUTARIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDONACIÓN DE DEUDAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE / COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Problema Jurídico

“El problema jurídico se contrae en determinar si el Acuerdo 016 de 2024, expedido por el Concejo del municipio de Garzón (H), ‘POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TRANSITORIAMENTE LOS ARTÍCULOS 149, 277 Y 819 DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 025 DE 2023 DEL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA’, soslaya los artículos 1º, 150-12, 287-3, 294 y 338 Constitucionales, y 32-6 de la Ley 136 de 1994.”

Extracto

“Para abordar la anterior controversia, se tiene que los artículos 2º y 3º del Acuerdo 016 del 5 de junio de 2024, establecieron un descuento del 10% por pronto pago (hasta el 30 de junio de 2024) de los impuestos de industria y comercio, complementario de avisos y tableros, de circulación y tránsito, tal y como se estableció en el acápite de lo probado, lo cual constituye un beneficio tributario, pues antes de que se configure la obligación confiere a los contribuyentes un privilegio e incentivo por el pago anticipado del impuesto, estando ello autorizado por el ordenamiento jurídico como en principio se estableciera...”

“Por lo expuesto, al implementar los artículos 1º y 2º del acuerdo acusado, un beneficio tributario (más no una amnistía) en favor de los contribuyentes que realicen un pago temprano de los impuestos municipales, en la forma en que fue formulado el único cargo en contra de dichas disposiciones, no está llamado a prosperar, pues como antes se estableciera, al Concejo Municipal de Garzón le asiste competencia para establecer el citado beneficio.”

“No ocurre lo mismo con el artículo 3º del Acuerdo 016 de 2024, el cual estableció como ‘beneficios temporales’ un descuento del 80% en los intereses moratorios (de las vigencias 2023 y anteriores) de los impuestos de circulación y tránsito, industria y comercio y predial unificado, desde la vigencia del citado acuerdo y hasta el 31 de julio de 2024; medida que constituye una auténtica amnistía tributaria.”

“Por todo lo expuesto, se tiene que el Concejo de Garzón (H) en el artículo 3º del Acuerdo 016 de 2024 que fijó un descuento en los intereses moratorios de los contribuyentes incumplidos, desbordó el marco de su competencia y desconoció la normativa invocada en la demanda en tanto le está vedado establecer amnistías tributarias, razón por la cual, el único cargo invocado prospera frente al citado artículo y por ello se declarará su invalidez.”

[Sentencia del 10 de septiembre de 2024, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001-23-33-000-2024-00214-00](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Ramiro Aponte Pino
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 004-2018-00256-01
<b>Demandante:</b>	Agencia Nacional de Minería
<b>Demandado:</b>	Municipio de La Plata (Huila)
<b>Fecha:</b>	17 de septiembre de 2024

## EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES / LAS ENTIDADES TERRITORIALES NO PUEDEN VETAR LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO / NULIDAD DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL

### Problema Jurídico

"...el sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia, en especial precisar: i) si el concejo de La Plata estaba facultado para prohibir la explotación minero - energética en su jurisdicción; ii) el carácter vinculante de la sentencia de unificación 095 de 2018, y iii) si en el trámite y expedición del acuerdo municipal acusado, el ente territorial aplicó o desconoció los principios de coordinación, concurrencia y rigor subsidiario (artículo 77 de la Ley 136 de 1994).

Finalmente, determinar si en esta instancia se puede analizar el cargo formulado en la impugnación: desconocimiento de los principios de progresividad y precaución."

### Extracto

"En el trámite del acto enjuiciado brilla por su ausencia un medio de convicción que acredite que la autoridad municipal invitara, concertara o socializara su contenido con la Agencia Nacional de Minería u otra autoridad competente en la formulación del proyecto (lo cual, fue aceptado por el alcalde y por el presidente del concejo).

Incluso, la Ani, el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena certificaron que no tuvieron ninguna injerencia ni participación en la formulación del proyecto que dio origen al acuerdo (porque no fueron invitados)."

"De otro lado, no es de recibo aceptar que esa falencia se supliera acudiendo simplemente al principio de subsidiariedad (artículo 77 de la Ley 136 de 1994), porque la participación ciudadana es inherente al trámite de todos los proyectos de acuerdo (la cual es facultativa); sin embargo, siguiendo los principios orientadores consagrados en el artículo 288 Superior, los temas relacionados con el ordenamiento



territorial (y las competencias atribuidas a los diferentes niveles), se deben ejercer sujetándose a los pilares de coordinación y complementariedad.

De suerte, que se requería la intervención de las referidas autoridades nacionales y ambiental; las cuales, no pudieron intervenir, porque no tuvieron conocimiento del trámite del acuerdo."

"Huelga recordar, que las sentencias de unificación tienen fuerza obligatoria a manera de precedente y deben ser acatadas por los operadores judiciales; en aras a garantizar la igualdad ante la ley, la buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica (sentencia C-179 de 2016). Por lo tanto, se debe tener en cuenta la conclusión a la que arribó la H. Corte Constitucional, quien considera que las entidades territoriales no pueden vetar la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables."

"Con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso, no se analizará el cargo relacionado con la inobservancia de los principios de progresividad y precaución; como quiera que estos reparos fueron formulados en el escrito de alzada, y la parte accionante no tuvo la oportunidad de controvertirlos."

"En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo."

[Sentencia del 17 de septiembre de 2024, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41001-33-33-004-2018-00256-01](#)



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Primera
Radicación:	41 001 23 33 000 2023 00417 00
Demandante:	Saín Aguirre Montealegre
Demandado:	Acto de elección de Lenin Alberto Trujillo González como alcalde de Yaguará - Huila
Fecha:	3 de septiembre de 2024

## IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO DE ELECCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL DE YAGUARÁ / RESIDENCIA ELECTORAL / PRUEBA DE RESIDENCIA ELECTORAL

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala resolver ¿si debe anularse el acto de elección del señor Lenin Alberto Trujillo González, como alcalde municipal de Yaguará – Huila para el periodo constitucional 2024-2027, contenido en el acta de escrutinio formulario E - 26 ALC – del día 31 de octubre de 2023, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Yaguará, al no reunir una de las calidades que señala el artículo 86 de la ley 136 de 1994, para ser elegido en ese cargo, consistente en la residencia en el respectivo municipio durante el año anterior a la inscripción de la candidatura o tres años consecutivos en cualquier época?”

### Tesis de la Sala

“La Sala negará las pretensiones de la demanda, pues del material probatorio allegado, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto de elección demandado, en tanto que no se demostró que el señor Lenin Alberto Trujillo González, quien resultara elegido por voto popular en las elecciones del pasado 29 de octubre de 2023 como alcalde de Yaguará – Huila para el periodo constitucional 2024-2027, no tuviera su residencia electoral en ese municipio, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 136 de 1994.”

### Extracto

“De tal material probatorio, la Sala no encuentra acreditado que el señor Lenin Alberto Trujillo González no residía en el municipio de Yaguará -Huila y por ende, que incumplió con el presupuesto de residencia electoral establecido en el artículo 86 de la Ley la ley 136 de 1994, como requisito para aspirar a la alcaldía del mencionado

municipio, y por el contrario, lo que probó es que al momento de su inscripción como candidato a ese cargo, tenía fijada su residencia en tal localidad, pues se encuentra registrado en el censo electoral del mencionado municipio, ha desarrollado actos profesionales según se infiere de los oficios dirigidos a la alcaldía municipal por parte del juzgado Primero Civil de Neiva, residió como arrendatario de dos viviendas en el municipio de Yaguará y porque incluso, participó en la contienda electoral desarrollada para el periodo constitucional 2020-2023.”

“En conclusión, se negarán las pretensiones, comoquiera que no se demostró que el demandado Lenin Alberto Trujillo González no residiera en el municipio de Yaguará – Huila, dentro del año anterior a la inscripción para ser elegido alcalde de ese municipio, en la medida en que se acreditó que durante ese periodo e incluso desde principio del año 2022, el demandado fijó su residencia en ese municipio.”

[Sentencia del 3 de septiembre de 2024, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41 001 23 33 000 2023 00417 00](#)

# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 006 2018 00003 01
Demandante:	Raimundo Vargas Castro
Demandado:	Contraloría Departamental del Huila
Fecha:	24 de septiembre de 2024

## CONTROL JURISDICCIONAL DEL FALLO DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL / IMPOSICIÓN DE MULTA A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / GERENTE CONDICIÓN DE GESTOR FISCAL

### Problema Jurídico

"Debe determinarse si la calificación del grado de culpabilidad del responsable fiscal fue consecuente con la norma, y en consecuencia debe revocarse la sentencia de primera instancia, o si por el contrario en calidad de gerente debía asumir la sanción."

### Extracto

"De lo acreditado, encuentra la Sala que la calificación de la conducta por parte de la Contraloría Departamental del Huila a la hora de realizar la imputación y el mismo análisis que da a la culpa en el fallo está fundada fácticamente al indicarse, respecto del implicado, que:

"Para la época en que se debía reportar la información al SIU (2008) como obligación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A. E.S.P., deber que estaba en cabeza de su gerente como representante legal; el señor RAIMUNDO VARGAS CASTRO ejercía el cargo de Gerente, quien el deber de cumplir o hacer cumplir oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionaran con el funcionamiento y actividades de la sociedad, exigencias que para el caso particular se encontraban contenidas en las resoluciones de la CRA del año 2006 ya anotadas, que establecían un reporte de información precisa dentro de unas fechas específicas, sin embargo quedó probado a lo largo del proceso que tal deber funcional fue omitido y por tal razón la empresa se hizo destinataria de una sanción administrativa con lo cual se afectó el patrimonio público." (...)

"Entonces, se tiene que el demandante ostentaba la calidad de empleado público y gestor fiscal, era quién obraba en nombre y representación de la empresa EMAC S.A. E.S.P, y como administrador de los recursos, para la época de los hechos. Teniendo

en cuenta las funciones que le fueron atribuidas a su cargo en el manual de funciones y en la escritura pública al momento de la constitución de la empresa, funciones que también fueron tomadas en consideración por el a-quo, se concluye que su actuar negligente generó el detrimento patrimonial a la empresa de carácter público. Además, el demandante (ex gerente) tampoco presentó prueba que desvirtuara aquel actuar negligente.

De igual manera, de la conducta fáctica del demandante, es claro que se ocasionó un daño patrimonial certero a los recursos de la empresa EMAC S.A. E.S.P. con la imposición de la sanción por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, daño que no fue desvirtuado. Además, una conducta negligente, calificada como culpa grave por el ente de control fiscal, resultante de la falta de diligencia extrema que generó un perjuicio evidente para la empresa que el gerente debía proteger, y un nexo de causalidad entre el daño y la conducta, por lo tanto, se configuraron los tres elementos que deben existir al momento de imputar la responsabilidad fiscal a un gestor fiscal."

"En consecuencia, la Sala advierte sobre la importancia de que los gerentes de empresas de carácter público actúen con un nivel alto de cuidado y diligencia en sus funciones, dado que administran y procuran conservar los recursos públicos. En este caso, el Ex Gerente actuó con culpa grave al no cumplir con las funciones de vigilancia y control que le correspondían en su cargo, lo cual llevó a un detrimento patrimonial para la entidad pública, luego de que esta asumiera el pago de la sanción impuesta por la extemporaneidad en el cargue de los reportes al Sistema Único de Información - SIU."

"En síntesis, la culpa grave se configuró cuando el Ex Gerente en calidad de gestor fiscal, incurrió en una omisión inexcusable de los deberes administrativos. En este caso, quedó demostrado por la falta de diligencia que se tuvo al momento de presentar los informes al SIU, en las fechas establecidas y dando cumplimiento a las Circulares de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta negligencia estuvo demostrada en la actuación omisiva del Ex Gerente que fue también evidentemente descuidada, alejada del comportamiento que se espera de una persona en su posición y en una desatención notable al cumplimiento de sus funciones y de las exigencias legales."

[Sentencia del 24 de septiembre de 2024, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41 001 33 33 006 2018 00003 01](#)

# NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Primera
Radicación:	41 001 23 33 000 2019-00454-00
Demandante:	Departamento del Huila
Demandado:	Fidel Barrios Pacheco
Fecha:	8 de octubre de 2024

## ACCION DE LESIVIDAD / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ / SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA MESADA PENSIONAL

### Problema Jurídico

“Corresponde a la Sala establecer si ¿se encuentra viciada de nulidad por falsa motivación la Resolución No. 410 de 25 de abril de 2002, proferida por el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila, mediante la cual reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia en favor del señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d)?

En caso afirmativo, debe dilucidarse si ¿hay lugar a acceder a la pretensión de suspensión del pago de las mesadas pensionales a los herederos que existan y si deben ser condenados a reintegrar los pagados por ese concepto a la entidad demandante?”

### Tesis de la sala

“La Sala accederá a las pretensiones solicitadas por el Departamento del Huila, comoquiera que se desvirtuó la presunción de legalidad que amparaba la Resolución No. 410 de 2002, mediante la cual el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Huila reconoció la pensión de vejez al señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d), en tanto que se acreditó que no cumplía los requisitos legales para ello, como lo era un tiempo de servicios igual o superior a 20 años.

Asimismo, como no se acreditó que el demandado haya accedido a tal derecho prestacional con maniobras fraudulentas o dolosas, esto es, que actuó de mala fe, al tenor de lo previsto en el literal c) numeral 2 del artículo 164 del CPACA, se negará la pretensión de devolución de los dineros que el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d),

hubiere recibido por concepto de la pensión de vejez.”

### **Extracto**

“Es claro para la Sala que existió un reconocimiento pensional irregular y con falsa motivación, comoquiera que el Departamento del Huila reconoció la pensión de jubilación al demandado Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) teniendo en cuenta como tiempo laborado el periodo comprendido entre 1968 al 01 de mayo de 1978, cuando está evidenciado que se tuvo en cuenta un documento que no corresponde a la realidad en tanto que no existe prueba alguna que así lo corrobore y por lo que ha de concluirse que la parte demandada no logró acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para adquirir el derecho a la pensión.

Lo anterior impone afirmar que así no exista prueba que indique que el señor Fidel Barrios Pacheco (q.e.p.d.) fue el responsable de la adición de tiempos contenida en la documentación que sirvió de base para el reconocimiento pensional que le viene siendo pagado o que fue quien adulteró tal documento, no es razón para desestimar los argumentos de la entidad demandante, por cuanto no se encontró soporte probatorio que hubiere acreditado que el demandado laboró para el ente territorial del 1º de enero de 1968 al 01 de mayo de 1978.”

“En ese orden de ideas, se declarará la nulidad del acto demandado y como consecuencia de ello, se ordenará la suspensión del pago de las mesadas pensionales al señor Fidel Barrio Pacheco (q.e.p.d) y que ante su fallecimiento le fue reconocida la pensión sustitutiva a la señora MARÍA TERESA FLORIAN DE BARRIOS en calidad de cónyuge, mediante la Resolución No. 0037 del 25 de enero de 2021.

En lo correspondiente a la pretensión de reintegro de las sumas percibidas y pagadas al demandado por concepto de las mesadas pensionales irregularmente reconocidas, la Sala precisa que tal súplica no procede de manera automática y que solo se accede a ello, cuando en el proceso se demuestre que el demandado actuó de mala fe o cuando aparezca diáfano que actuó de manera fraudulenta, en tanto que, conforme al artículo 83 de la Constitución Política, la conducta de los particulares y de las autoridades públicas se rige por el principio de buena fe, la cual se presume cuando los particulares adelantan algún trámite ante las autoridades públicas, no obstante, por tratarse de una presunción legal, admite prueba en contrario.”

[Sentencia del 8 de octubre de 2024, M.P: José Miller Lugo Barrero, radicación: 41 001 23 33 000 2019-00454-00](#)



Magistrada Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-004-2015-00161-01
Accionante:	Gloria Marina Hoyos de Medina y otros
Accionado:	ESE Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja (H)
Fecha:	3 de septiembre de 2024

## FALLA DEL SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / MUERTE POR SHOCK ANAFILÁCTICO Y PARO CARDIORESPIRATORIO POR PICADURA DE AVISPA

### Problema Jurídico

“El sub júdice se contrae en establecer si la muerte de María de los Ángeles Medina oyos es imputable a la ESE Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja (H).

Para lo anterior, se deberá precisar: (i) si la atención suministrada a la paciente fue oportuna, (ii) si la señora Medina ingresó sin signos vitales al centro hospitalario y si el tratamiento médico suministrado resultó adecuado, (iii) si el tiempo en que tardó la antes nombrada en llegar al nosocomio tuvo incidencia en su deceso; y, (iv) si resultaba obligatorio la realización de la necropsia e informar a los familiares sobre el fallecimiento.”

### Extracto

“Lo expuesto por los declarantes, pone de presente que para el 7 de abril de 2013 en que acaecieron los hechos, el hospital demandado no contaba con el recurso humano que permitiera la atención oportuna de la patología de urgencia que padecía la señora Medina, pues por carecer de un celador el servicio de urgencias se mantenía cerrado, y la auxiliar de enfermería que atendió a la paciente no era apta para prestar el servicio, dado que “acababa de ser operada” y por ello no pudo subirla a la camilla ni suministrarle la atención primaria que requería.”

“Así las cosas, al dar cuenta la historia clínica de maniobras de reanimación y del suministro de oxígeno por ambú más no a través de una intubación, evidencia el Tribunal que dejó de aplicarse el método más efectivo para garantizar el oxígeno a la paciente, atendiendo a su estado de inconsciencia y carencia de signos vitales.”



Por lo expuesto, salta a la vista que el hospital demandado dejó de aplicar los procedimientos y fármacos que conforme a la lex artis, resultaban más efectivos e idóneos para el tratamiento de la patología de urgencia que padecía la señora María de los Ángeles Medina Hoyos, por lo que la apelación en cuanto propende por el suministro de un tratamiento adecuado a la antes nombrada, no esta llamada al éxito.”

“En suma, es menester colegir, en primer lugar, que la señora María de los Ángeles Medina Hoyos falleció por causa de un shock anafiláctico y paro cardiorrespiratorio derivados de la picadura de una avispa en su lengua; en segundo lugar, que la patología avanzó sin el tratamiento inmediato que requería dado que el servicio de urgencias estaba cerrado y cuando fue atendida, dejó de aplicársele los procedimientos y fármacos que conforme a la lex artis correspondía, todo lo cual contribuyó a la pérdida de la oportunidad de salvaguardar la vida de la paciente; y, en tercer lugar, que se omitió ordenar la realización de la necropsia e informar a la familia del deceso.

En virtud de lo expuesto, se acreditó la falla en la prestación del servicio médico prestado por la ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA (H), pues las omisiones e irregularidades antedichas fueron determinantes en la producción del daño que se demanda, por lo que habrá de confirmarse la decisión impugnada en cuanto declaró la responsabilidad administrativa del mencionado hospital, pero por las razones aquí expuestas.”

[Sentencia del 3 de septiembre de 2024, M.P: Nelcy Vargas Tovar, radicación: 41001-33-33-004-2015-00161-01](#)



Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	410013333-702-2015-00127-02
Accionante:	Nelly Cortés Rocha y otros
Accionado:	Municipio de Algeciras y Electrohuila SA ESP
Fecha:	10 de septiembre de 2024

**MUERTE POR ELECTROCUTAMIENTO / INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD - NO SE DEMOSTRÓ QUE SE TRATE DE UN RIESGO QUE EXCEDE AL COMÚN DE HABITANTES**

**Problema Jurídico**

“Corresponde al Tribunal decidir si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia, porque según la parte actora se encuentra probada la falla del servicio por falta de mantenimiento en las redes eléctricas y porque Electrohuila SA-ESP y el municipio de Algeciras, al ser beneficiarios del servicio eléctrico deben responder por los daños que ocasione esta actividad riesgosa.

La tesis del Tribunal es que debe confirmarse la decisión recurrida, porque se encuentra demostrado el daño ocasionado (muerte del señor Edwin Basto Rocha por electrocución) pero no se probó la imputabilidad a las demandadas por falla del servicio al estar las redes eléctricas en mal estado o con falta de mantenimiento ni que se hubiera puesto en una situación de riesgo extraordinario al señor Edwin Basto Rocha.”

**Extracto**

“Así, las pruebas individualmente consideradas y en su valoración de conjunto, demuestran que las redes e infraestructura eléctrica del lugar del deceso estaban instaladas en debida forma, a la altura reglamentaria, las torres no estaban energizadas, las redes no estaban deterioradas y, por tanto, no es meridianamente aceptable que su electrocución la causaron las redes eléctricas, o sea, no se demostró la falla del servicio.”

“En conclusión, la parte actora no logró demostrar que el daño fuera producto de una falla del servicio originada en las estructuras y redes eléctricas, porque cumplen con las normas RETIE, no se encontraban en malas condiciones o defectuosas, que los templetes estuvieran energizados o que alguna cuerda cayera sobre el occiso y no

existen vestigios de alguna alteración por corto circuito o descarga eléctrica que hubiere generado el contacto con el fallecido.

De otra parte, al analizar la imputabilidad a partir del riesgo excepcional, tampoco encuentra la Sala que se haya configurado pues la sola presencia de las redes eléctricas en el sitio donde falleció el ciudadano Edwin Basto Rocha, no resulta suficiente para su configuración, sino que debe ser un riesgo que excede al común que tienen todos los residentes del sector donde dichas redes se ubican o está su trazado y la demanda no señaló ninguna circunstancia constitutiva del mismo.

Al contrario, el riesgo se desvirtuó porque se trata de un lugar alejado de la vivienda más próxima y allí iban de manera recurrente los vecinos para hacer sus llamadas telefónicas por tener mejor señal o recepción en sus equipos de comunicación, así lo narraron al unísono todos los testigos y fuera de eso, el sentido común enseña que, si el lugar fuera peligroso, por instinto las personas se mantienen alejadas de él.”

“En el presente caso, la Sala no encuentra acreditada la forma cómo el señor Basto Rocha sufrió el percance que segó su vida, si bien el único indicio que existe es que al haber muerto por electrocución como certificara el médico legista y su cadáver se encontró cerca de las Torres conductoras de energía, como señalaron los testigos, pudo recibir una descarga eléctrica, pero técnicamente no se abre la posibilidad de la descarga porque las estructuras no estaban energizadas ni la redes presentaron defectos de acuerdo con los informes rendidos por el personal de la Electrificadora, de ahí que no hay nexo de causalidad entre la muerte y la red eléctrica.

Así las cosas, a pesar de que se demostró el daño, no se logró evidenciar la imputación de responsabilidad a la demandada Electrohuila SA ESP ni el nexo causal que conducen a la confirmación de la sentencia por lo aquí analizado.”

[Sentencia del 10 de septiembre de 2024, M.P: Jorge Alirio Cortés Soto, radicación: 410013333-004-2015-00127-02](#)



Magistrado Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 40 007 2016 00079 01
Demandante:	Pilar Constanza Quiza Home y otros
Demandado:	Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Fecha:	24 de septiembre de 2024

USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / MUERTE DE CIVIL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / DISPARO DE ARMAS DE FUEGO / EVASIÓN DEL RETÉN POLICIAL

Problema Jurídico

"Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación incoado por las parte accionada contra la sentencia de fecha 28 de agosto de 2018, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual deberá determinar si las pruebas allegadas permiten atribuir a la entidad demandada la responsabilidad de reparar los daños causados a los demandantes como consecuencia del deceso del señor DOUGLAS JHONATTAN ALFREDO GOMEZ POLANIA (q.e.p.d.), en hechos acaecidos el 16 de febrero de 2014, durante un operativo policial o si, por el contrario, se configuró el eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima o una concurrencia de culpas."

Extracto

"El 16 de febrero de 2014, el señor DOUGLAS JHONATTAN ALFREDO GOMEZ POLANIA, quien contaba con 30 años de edad, se movilizaba en una motocicleta de placas KTG 30B marca Suzuki, cuando pasó por un puesto de control o retén de la Policía Nacional en el barrio San Martín."

"Ante la omisión de pare, los policiales iniciaron la persecución de DOUGLAS JHONATTAN ALFREDO GOMEZ POLANIA, procedimiento durante el cual hicieron uso de armas de dotación, impactando en su humanidad."

"El a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, considerando que con la prueba recaudada quedó acreditado el daño, esto es, la muerte de DOUGLAS JONATTAN GÓMEZ POLANÍA."

"Concluyó que los disparos realizados por los miembros de la policía que perseguían al presunto infractor, constituyen el riesgo como fuente de la responsabilidad, puesto que si bien el agente del estado se encontraba actuando dentro de un margen de legalidad (no se probó el dolo en este proceso), no se puede estar utilizando las armas de fuego para hacer tiros al aire, pues puso en riesgo a todas las personas presentes en el lugar, inclusive a los mismos policías, que trataban de cumplir con sus deberes funcionales."

"Para poder dilucidar en problema jurídico que se nos presenta es pertinente efectuar una reconstrucción de la forma en que se dieron los hechos que finalizaran con la muerte del señor DOUGLAS JHONATTAN ALFREDO GOMEZ POLANIA el día 16 de febrero de 2014 sobre las 11:00 de la noche en la ciudad de Neiva, en inmediaciones del barrio 'El Limonar'."

"Ahora, partiendo del testimonio de JOSE LUIS DIAZ VILLARRAGA, es posible concluir que la hipótesis que se materializó en el presente asunto, fue aquella que permite ubicar al occiso en un plano inferior, en una posición un poco agachada hacia adelante, posición que usualmente es asumida por los conductores de motocicleta cuando transitan a alta velocidad y que el agente que le disparó se hallaba en un plano superior, lo que coincide con la ubicación del agente que le disparó desde el platón del vehículo oficial, tal y como lo afirma el testigo."

"Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, en relación con la condena y liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, no sin antes precisar que el pago de la condena deberá ser actualizada al valor del salario mínimo vigente a la fecha del presente fallo."

[Sentencia del 24 de septiembre de 2024, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41 001 33 40 007 2016 00079 01](#)



Magistrado Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001 33 33 702 2015 00206 01
Demandante:	Herlinda Samboní Chilito y otros
Demandado:	ESE Hospital San José de Isnos
Fecha:	1 de octubre de 2024

**FALLA DEL SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS / INDEBIDA ATENCIÓN AL PACIENTE / OMISIÓN POR FALTA DE REMISIÓN OPORTUNA A IPS DEMAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD / TORCIÓN TESTICULAR / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD**

**Problema Jurídico**

“Corresponde a la Sala determinar si las pruebas allegadas y practicadas dentro del proceso, permiten atribuirle responsabilidad a la E.S.E. Hospital San José de Isnos de reparar los daños causados con ocasión de la pérdida del testículo izquierdo de Dairo Alejandro Samboní Chilito, acaecido presuntamente por una falla en la prestación del servicio médico asistencial que le fue brindado en la institución en los días 27, 29, 30 y 31 de marzo de 2013.”

**Extracto**

“En la sentencia de primera instancia, el a quo concluyó que la pérdida del testículo izquierdo de Dairon Alejandro Samboní Chilito es imputable fáctica y jurídicamente al Hospital San José de Isnos a título de falla en el servicio médico, toda vez que, durante el tiempo en el que el menor estuvo hospitalizado, se le diagnosticó únicamente una epididimitis, sin contemplarse que podía presentarse una torsión testicular, tal como debía concluirse a la luz de los protocolos médicos.”

“Se muestra contrario a la diligencia y la prudencia que los médicos generales que atendieron al paciente a partir del 29 de marzo cuando acudió por segunda vez al servicio de urgencias, sometieran al paciente a una espera tan larga para ser remitido al III nivel donde finalmente fue valorado por un especialista.”

“Para la Sala no es posible considerar como justificación suficiente de la tardanza en la remisión que en la historia clínica se haya señalado que en II nivel recomendaron que el paciente debía permanecer hospitalizado en I nivel, primero, porque no es aceptable una recomendación médica dada vía telefónica sin que se haya efectuado

una valoración física del paciente, segundo, porque no hay evidencia de que la misma haya sido dada por un médico especialista y tercero, porque dentro del trámite adelantado por el Tribunal de Ética Médica quedo establecido que el medico Omar Gómez, quien presuntamente hizo la recomendación, no se encontraba de turno en ese momento, por lo que no existe claridad de lo que realmente sucedió.”

“Así las cosas, como está acreditado que la atención médica brindada fue precaria y que esta conducta afectó la oportunidad de preservar el testículo del paciente, concluye la Sala que el daño causado resulta imputable al Hospital recurrente bajo la óptica de la pérdida de la oportunidad o pérdida de chance.”

“En este sentido se confirmará la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar la responsabilidad del Hospital San José de Isnos, pero en los términos señalados en esta providencia.”

[Sentencia del 1 de octubre de 2024, M.P: Gerardo Iván Muñoz Hermida, radicación: 41001 33 33 702 2015 00206 01](#)



<b>Magistrado Ponente:</b>	Enrique Dussán Cabrera
<b>Instancia:</b>	Segunda
<b>Radicación:</b>	41 001 33 33 004 2015 00108 01
<b>Demandante:</b>	Johana Andrea Ocampo Caicedo y otros
<b>Demandado:</b>	Instituto Nacional Penitenciario -INPEC- y O.
<b>Fecha:</b>	22 de octubre de 2024

**FALLA DEL SERVICIO DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / OBLIGACIONES DEL INPEC / ATENCIÓN MÉDICA DEL RECLUSO / ENFERMEDAD GRAVE / MUERTE DEL RECLUSO**

**Problema Jurídico**

“Conforme al recurso de alzada y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si se configuró la falla del servicio por omisión en el cumplimiento de un deber legal de las entidades demandadas, específicamente en la protección del principio de dignidad humana, del interno para la fecha de su reclusión en el Centro carcelario y Penitenciario de Neiva, o si debe revocarse la sentencia impugnada que accedió a las pretensiones de la demanda.”

**Extracto**

“En el presente asunto el a quo en aplicación del principio de Iura Novit Curia y tras haber realizado un análisis del material probatorio obrante, concedió las pretensiones de la demanda, por haberse acreditado que el INPEC, incumplió sus obligaciones de garante del principio de dignidad humana, cumplimiento de garantías constitucionales y derechos humanos del interno.”

“Para esta Sala, queda plenamente acreditado que el señor Edgar Ocampo Ceballos, desde el momento del ingreso a reclusión en el centro carcelario, en donde en su valoración de ingreso se le diagnosticó la Enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC-, presentó quebrantos de salud; y los mismos se fueron agudizando y en el mes de octubre de 2012, en donde requirió constantes atenciones médicas tanto en el área de sanidad de la institución como por consulta externa, servicio prestado por Caprecom IPS o en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.”



“De esta manera, se establece claramente que la situación de salud del interno, era plenamente conocido por la Institución desde el inicio de su reclusión, además que en el mes de octubre de 2012 sus síntomas fueron más severos generando un delicado estado de salud y aun así no se realizó el trámite respectivo para valorar el estado de gravedad de la enfermedad, con la finalidad de establecer si la misma era incompatible con la vida en reclusión formal.”

“Así las cosas, al estar acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad extracontractual del estado como lo establece el artículo 90 de la C.P., esta Corporación confirmará la sentencia apelada, que concedió las pretensiones de la demanda, por encontrarse acreditada la responsabilidad del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC-.”

[Sentencia del 22 de octubre de 2024, M.P: Enrique Dussán Cabrera, radicación: 41 001 33 33 004 2015 00108 01](#)



Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte Pino
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 003 2016 00368 02
Demandante:	Yulieth Carolina Torres Jaimes y otros
Demandado:	DIAN
Fecha:	29 de octubre de 2024

## FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / OMISIÓN DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR - DELITO / EL PROCESADO DEBIÓ PROBAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

### Problema Jurídico

“Teniendo en cuenta que la sentencia fue impugnada por las partes, el análisis del asunto se puede abordar sin limitación (artículo 328 del CGP); en tal virtud, el sub lite se contrae a establecer si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia porque se presentó la culpa exclusiva de la víctima, o precisar si la Dian es administrativa y patrimonialmente responsables de la privación de la libertad sufrida por el señor José Isauro Torres Cáceres, quien fue condenado el 30 de septiembre de 2015 por el delito de omisión de agente retenedor o recaudador.

En caso afirmativo, determinar si se configuró una concurrencia de culpas que amerite la reducción de la condena.”

### Extracto

“En el asunto sub examine está probado que en cumplimiento del deber establecido en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004, la Dian denunció al señor José Isauro Torres Cáceres porque no consignó el Iva recaudado en la anualidad 2007 (periodos 1, 3 y 4).”

“En dos oportunidades el defensor del procesado solicitó el aplazamiento de la audiencia de lectura del fallo (4 de febrero y 23 de junio de 2015), con el fin de explorar un acuerdo de pago con la Dian.

La diligencia finalmente se realizó el 30 de septiembre de 2015 (sin la presencia del procesado), y le impusieron una condena de 48 meses de prisión (domiciliaria) y una

multa de \$6.348.000. Dicho fallo quedó ejecutoriado el mismo día, porque no fue recurrido por las partes.”

“Aunque el procesado pagó las obligaciones tributarias el 23 de julio de 2015, no comunicó oportunamente tal situación a su defensor ni a la fiscalía ni al juez de conocimiento; amén de que tampoco compareció a la audiencia de lectura de fallo; a pesar de que tenía conocimiento que era de carácter condenatorio.

Huelga destacar, que en esa audiencia el acusado pudo acreditar el pago de la obligación, y habría dado lugar a que cesara el procedimiento; porque la emisión del sentido de fallo no impedía el reconocimiento de una causal objetiva de extinción de la acción penal.”

“En esa medida, en el presente caso no se probó que el señor Torres Cáceres sufriera un daño antijurídico atribuible a la Dian, pues fue su propia incuria la que propició la afectación; en tal virtud, se revocará la providencia impugnada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.”

[Sentencia del 29 de octubre de 2024, M.P: Ramiro Aponte Pino, radicación: 41 001 33 33 003 2016 00368 02](#)

### **NOTA**

La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado en el [aplicativo SAMAI](#).

### **CONTÁCTENOS**

**Palacio de Justicia Neiva- Huila**

**Carrera 4 No. 6-99 Oficina 1108**

**Email: [reltadmnei@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:reltadmnei@cendoj.ramajudicial.gov.co)**

**<http://ramajudicialdelhuila.gov.co/newSite/administrativo/>**

**<https://www.facebook.com/tribunaladministrativodelhuila>**